

La izquierda integrada al pueblo y la solidaridad: revisiones de Política Popular

JULIO BRACHO

MUCHOS de los conflictos sociales que se expandieron a principios de los años setenta en México tuvieron un claro origen en las condiciones políticas que se exacerban con la represión del movimiento estudiantil de 1968. Se había evidenciado el lado tiránico del régimen político de ese entonces y la alternativa más radical fue la de contestar con la misma moneda a la violencia organizada por el Estado por encima de sus propias leyes. El Estado mexicano había cobrado toda la cara de la tiranía al masacrar a los estudiantes que ejercían primordialmente el derecho de manifestación para impugnar anteriores actos violentos del gobierno. Fue común echar mano de todo tipo de argumentos denostadores que hicieran ver a los estudiantes como movidos por intereses extraños y enemigos de la nación; fue entrar en un círculo vicioso en el que, desde un campo u otro, la única respuesta era la supresión de la parte escoriada y corrupta de la sociedad: para unos acabar con los “comunistas” que atentaban contra la autoridad del régimen, para otros quitar al gobierno asesino. De esa confrontación, para la joven generación que la vivía, resultaron diversas alternativas y matices imbuidos de una búsqueda y de una respuesta sin cortapisa. Para hacer la revolución, o para continuarla, las tácticas o las estrategias que se proponían entre los diferentes grupos de izquierda fueron de diversos tipos.

La confrontación se daba contra un régimen que se postulaba como revolucionario y no hacía más que mostrar la vacuidad de su discurso, su demagogia. Esto volvía aún más apremiante la necesidad de marcar las distinciones en otro terreno. En un extremo, hubo quienes procuraban la lucha armada inmediata, en el otro, los que mucho más cómodamente buscaban entrar al Estado para cambiarlo desde adentro. Pero entrar al Estado, ser funcionario, era formar parte del elenco que habría que combatir, ya que, durante un buen tiempo, ser estudiante era pasar como enemigo ante cualquier uniformado institucional, era formar parte de una subclase política tipificada por su antagonismo al régimen. En buena medida arraigó para México, y de una manera mucho más clara para su generación joven, un movimiento social que trataba por todos los medios de deslindarse del Estado, que inclusive sólo quería comprender sus formas y su historia para poder desmantelarlo. Quienes pensaban y ponían en práctica presupuestaria la línea del cambio

desde dentro del aparato estatal, como podían explayarlo miembros del Partido Popular Socialista, fueron tachados de “reformistas”, término que se usó para demarcarse de los que no lo hacían.

La clásica distinción política entre gobernantes y gobernados perdía sus sentidos comunicantes, ya no era propicia en tanto que distinguía a los individuos según la función política que cumplían, siempre a partir de un mismo parámetro de semejanza. Desde estos términos la confrontación que surgió dio lugar a dos bandos que se querían absolutamente distintos y antagónicos. Transigir por cualquier motivo con funcionarios podía ser visto como traición.

La izquierda armada, la urbana y el “foquismo” guerrillero principalmente, llevó este antagonismo a la política de la ley del talión. Su efímera lucha tuvo como principal consecuencia el agigantamiento del aparato represivo mexicano. Ya una de las medidas inmediatas de la represión del 68 fue cerrar las armerías para desarmar progresivamente al común de la gente, emulando el clásico dictado para sujetar a un pueblo. Pero también desde entonces el aparato policíaco mexicano aprovechó la justificación de la guerra sucia mexicana para adquirir enormes proporciones y dar lugar a la plaga de cuerpos privados de los jerarcas del dinero y de la política en México, difuminando feudalmente la potencia centralizada del poder. Crecieron tanto, degeneraron tanto los cuerpos represivos mexicanos que desde entonces será común y corriente encontrarlos en el fondo de innumerables delitos, especialmente en aquellos que relevan de un alto grado de profesionalismo. Los asaltos a bancos y los secuestros de la guerrilla urbana o rural de ese entonces —muy curiosamente bien librados para varias de sus víctimas espectaculares en los años setenta— son ínfimos si se compara con lo que ha venido después atribuido a la delincuencia “especializada” sin ideologías. Pero además, para acabar con la guerrilla armada, el factor esencial no fue la represión selectiva, la tortura o la ley fuga, sino la apertura de la razón política que permitió abrir un cauce institucional a las libertades políticas, a la demanda de solución de problemas sociales. A ello contribuyeron, en efecto, una larga historia de luchas democráticas frustradas, una reflexión política cada vez más profunda de los teóricos sociales desestimada en su aportación a la viabilidad de la nación, pasos tan importantes como la reforma política que impulsó Reyes Heróles y mesuradamente amplió la contienda partidaria en la que pudo introducirse, organizada en partidos políticos, la izquierda tradicional como el Partido Comunista Mexicano o el Partido Revolucionario de los Trabajadores, o también motivados a formarse en ese entonces como el Partido Mexicano de los Trabajadores, pero el sustrato que permitió estos cambios fue, sobre todo, la prudencia y la templanza del pueblo mexicano, de los campesinos, de los trabajadores, de la gente común, la cual, en los conflictos políticos evaluaba las consecuencias de sus acciones y mesuraba las respuestas violentas del Estado, que estaba muy al corriente del grado y forma en que podía aventurarse para lograr la satisfacción de demandas y derechos. De una manera u otra, en la gran mayoría de los casos, se ensayaba el curso de la antesala estatal, con un respeto y conoci-

miento de las leyes y las instituciones que para muchos “revolucionarios” podrían ser vistos como exasperantes. A través de las solicitudes agrarias o los trámites del derecho laboral, se buscó dar solución a los conflictos, aunque siempre pendía la posibilidad de la represión o incluso del terror desplegado por el Estado o, a veces, emprendido por la violencia paramilitar privada. Una prudencia ante el terror dosificado del Estado, pero también una desconfianza ante los instigadores a la violencia.

Uno de los traumas más sobresalientes del movimiento del 68, que después se convirtió en argumento político para delinear acciones, fue la falta de participación popular en las filas de los aprendices rebeldes. El caso del apoyo de los campesinos de Topilejo, ese pueblo al sur del Distrito Federal, era casi la constatación misma del aislamiento de los estudiantes y, por otro lado, de las enormes posibilidades que ofrecía promover la organización del pueblo que pudiera superar las fuerzas gubernamentales en la siguiente confrontación a muerte.

Así, hubo otro sector de la izquierda no institucionalizada en los partidos característicos de izquierda que tendió a formular la necesidad de impulsar movimientos sociales para impugnar y limitar al Estado, para cercar al gobierno y finalmente “hacer la Revolución”. Aunque imbuida de rasgos clandestinos para poder sobrevivir en caso de represión, se movió generalmente de manera abierta entre los diferentes grupos sociales con los que se relacionó. Su gran virtud fue inmiscuirse directamente en los problemas sociales que regularmente tenían que confrontarse ante las instancias estatales, como el reparto agrario o la producción agrícola, las organizaciones sindicales o las de vecinos, las de colonos o las asociaciones populares que correspondieran a diferentes empeños gubernamentales. Estuvo distanciada de la representación organizada y pública de la vida política y mantuvo una dispersión regional que en muchos casos contribuyó a lo positivo de su diversidad. Pero fue durante su implantación en diferentes sectores sociales que se encontró no precisamente con lo amorfo de “las masas” sino con una serie de problemas sociales, jurídico-políticos o económicos de los que no podía abstraerse a base de “teoría revolucionaria china, rusa, francesa o alemana”, o de una visión del Estado como mera institución de la violencia organizada. Sus miembros crearon relaciones políticas abiertas con las diferentes instituciones estatales con las que se confrontaron y que les permitieron adiestrarse en las transacciones de la política mexicana, en sus formas y riesgos. También se creó una visión mucho más acorde con las formas económicas, sociales y jurídico-políticas de los conflictos en lo ancho de la sociedad, en la vida de la gente común; integrados muchas veces con las formas sectarias del militante, pero en contacto y contagio directo con las maneras habituales, históricas de la política mexicana, incluida la “institucional revolucionaria”.

El documento más importante que convocó a la integración con el pueblo fue *Hacia una Política Popular* que empezó a circular como folleto desde enero de 1969. Era un texto de brigadistas del movimiento estudiantil ya aterrorizado,

que tiene la cualidad de ser específicamente político, pues prácticamente deja a un lado las determinaciones de clase, por ejemplo las distinciones entre proletarios y campesinos y sus diferencias históricas relevadas por las largas discusiones de la izquierda para encontrar el “camino de la revolución”. Es un texto político que pone el acento durante todo su análisis en la distinción entre gobernantes y gobernados y se propone, como primer objetivo, que “las clases populares se interesen en las cuestiones del Estado”. Inclusive sitúa en una posición relativa al fenómeno revolucionario: pues “puede ocurrir una revolución, o varias, sin que el país sea transformado profundamente, cosa que requiere forzosamente que el pueblo rija sus propios destinos”. En él se convoca a ligarse a las clases populares con el fin de hacer política independiente del control institucional del Estado, al cual se caracteriza por su presidencialismo, su caudillismo y su paternalismo, mientras que a esto se aunan, como correspondientes de parte de los gobernados, el servilismo y el “peticionismo”, lo que hace que los “profesionales de la politiquería” sean los únicos a los que se les permite “hacer política”. Se gobierna “a espaldas del pueblo, es decir, en privado, sin la participación activa de las masas en las decisiones trascendentales” y el texto rehúsa la política como simple votación dado que de antemano “serán electos quienes han sido seleccionados previamente en los corrillos oficiales de la política mexicana”. Llama al pueblo a hacer su política pues “hacer política popular es luchar por la verdadera democracia, la democracia popular y revolucionaria”. Y esto lo establece como una característica fundamental que distingue “a la nueva izquierda mexicana” de algunas organizaciones tradicionales

que han olvidado que el objeto por el cual se lucha no es independiente de la forma en que se lucha[...] El sujeto político deja de ser un grupo de personas que actúa en nombre de sus supuestos representados; el sujeto será ahora las clases populares mismas que actúan a través de sus formas adecuadas de lucha y de las organizaciones independientes[...] Sólo siendo las propias clases populares el sujeto político, el pueblo será efectivamente soberano [...] es la lucha por el derecho democrático más trascendental del pueblo mexicano: el derecho de ser efectivamente soberano eliminando del poder cualquier minoría e instalando en su lugar un poder popular. Es por lo tanto una lucha por la producción de los medios populares necesarios para que los trabajadores mexicanos de la ciudad y el campo sean capaces de solucionar ellos mismos sus propios problemas. Y sobre todo, para que sean ellos y nadie más los que tomen, a todos los niveles, las decisiones que afectan su vida y su destino.

En este texto se hace sobre todo una defensa de la democracia directa a través de las organizaciones populares independientes, a partir de una concepción del pueblo unido, sin escisiones, dada la exclusión de los enemigos del pueblo, de las minorías que portan intereses contrarios a los populares, vistos principalmente en un reducido grupo de políticos, grandes industriales, banqueros y comerciantes. Son, en su programa, las grandes mayorías las que deben regir los destinos del país. En su momento fue desdeñado por la izquierda tradicional como simple populismo

reformista, pero su convocatoria no dejó de aportar varios elementos novedosos. Abría una puerta mucho más amplia a los diferentes sectores de la sociedad para movilizarse hacia la política por medio del planteamiento y demanda de sus intereses específicos, pues convocaba inclusive a los burócratas y empleados. Promovía la defensa de los intereses populares de una manera generalizada, los cuales, por las características del régimen político, que pretendía controlar todo tipo de organización o demanda popular, tenderían por el simple hecho de querer ser independientes a oponerse políticamente al Estado caracterizado también por sus formas políticas, como presidencialista y paternalista, y no, como era mucho más común en las escuelas revolucionarias, en términos económicos o sociales, como aparato de la burguesía, o en términos del otro linde de la política: el aparato de la violencia organizada. Aunque el manifiesto de Política Popular tampoco dejaba de mostrar su clara liga con la tradición de la Revolución francesa cuando declara querer “eliminar” del gobierno a “cualquier minoría”, lo que al menos se presta a confusiones.

Al plantear Política Popular que la forma de lograr su programa era primordialmente a través de la integración con las masas para participar en la solución de los problemas de las comunidades o diferentes grupos sociales, logró iniciar una serie de movimientos sociales importantes. El más novedoso y tumultuario, del que ni siquiera se habla específicamente en el texto, fue el que se desarrolló a partir de los “posesionarios” en los cinturones de miseria de las ciudades del norte del país como Monterrey, Durango, Chihuahua y Torreón, primero, pero que sirvió de ejemplo para que posteriormente surgieran en muchas otras ciudades, incluida la gran capital. Movimientos que dentro del marxismo ortodoxo podrían ser vistos como conformados por el “lumpenproletariado”, inclusive con diversas consecuencias contraproducentes a los objetivos “históricos” de la clase obrera, en su vida cotidiana tornáronse en movimientos sociales dirigidos primordialmente a resolver los múltiples problemas urbanos, empezando por el de vivienda. De igual manera, en términos políticos, como estaba previsto en el texto, constituyeron formas de participación popular que, efectivamente, tendieron hacia la política, a usar posteriormente inclusive su capacidad de voto como elemento que ha cobrado, cada vez más, su verdadera importancia política.

De lo que fueron después del movimiento de 1968 todos los grupos y partidos de la izquierda institucional —como el PCM, el PPS o el PMT— o inclusive los que se empeñaron en la lucha armada, fue la mal llamada “izquierda radical”¹ la que contribuyó de manera más amplia a conformar, durante la década de los setenta, un mayor número de movimientos sociales que emprendieron la vía de la organización independiente para resolver sus problemas específicos, para hacer valer sus derechos ante el Estado, así como para formar individuos con experiencia,

¹ Barbosa, Fabio, “La izquierda radical en México”, *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1984, pp. 111-137.

como participantes o mediadores directos, dentro de los conflictos sociales. Que es algo que siempre se propuso la izquierda, aunque con muy diferentes resultados y con consecuencias históricas características a las que posteriormente nos referiremos.

El llamado para “ir al pueblo” tuvo repercusiones más complejas e interesantes de lo que vaticinaban las críticas al “populismo”, y al “empirismo”, al “espontaneísmo” o al “reformismo” de que fue objeto: emprendidas desde las organizaciones y por los intelectuales de la izquierda institucional. Escaparse de ese dogmatismo que caracterizaba a las jerarquías burocráticas fue una de sus virtudes, así como, para ciertos estudiantes acomodados de las ciudades, constituyó la confrontación con condiciones sociales y culturales distintas, un conocimiento de la diversidad de la nación mexicana, una experiencia que contenía cambios de “clase social”, de condiciones de vida, de región geográfica y de formas culturales. Ligarse a los conflictos sociales y políticos de ese entonces instauró una dinámica de mesurada dispersión y autonomía que difícilmente se podían ver en los militantes tradicionales, con una disciplina orgánica. Esto contribuyó a consolidar una distinción: los que participaban “con el pueblo” y los que sólo se mantenían en las aulas, en los círculos de estudio o en las reuniones partidarias.

Aunque también en esa izquierda “ligada al pueblo” se estableció una especie de jerarquía entre militantes según la relevancia política que tenía el movimiento social en el que participaban o dirigían, correspondiendo más a las formas tradicionales de forjarse la importancia política de los liderazgos. Pero de todos modos había una diferencia que se contraponía a la de alcanzar puestos por jerarquía y desempeño en el interior de una organización partidaria tradicional. En este sentido, el vínculo con los problemas sociales como factor de identificación, diálogo y compromiso entre jóvenes estudiantes impulsó relaciones bastante diferentes a las que se daban en las células militantes o círculos de estudio de izquierda. Permitió que durante largo tiempo y en muchas circunstancias durante los conflictos sociales, en la toma de decisiones ante la que se enfrentaban quienes ahí participaban, se formara un conocimiento directo de los conflictos sociales y su historia así como una manera de hacer política tanto en el seno de las comunidades como frente al Estado: en diferentes formas se abrió la posibilidad de diálogo, entre las partes, aunque fuera áspero. Más que forjar una nueva organización de izquierda fue recurrir a darle un nuevo influjo a la forma conjunta en que se acostumbra intervenir en los asuntos comunitarios en los pueblos mexicanos, pero también en determinadas asociaciones sindicales o en algunas vecindades o barrios. En la medida en que tendió a convocar a la gente a resolver sus problemas, se hicieron extensivas formas de participación y consulta que llevaron a constituir una comunicación amplia en el seno de asambleas populares, de tal manera que éstas pudieran estar al tanto y participaran en los procesos de resolución de los problemas, tanto internos como los que se llevaban a cabo con las autoridades correspondientes. Así, el Estado se encontró con diferentes grupos sociales y líderes que no

se dejaron fácilmente manipular y corromper a la vieja usanza. Como se impulsaba la participación de muchos en las tareas de dirección, de pronto había demasiados líderes en cada uno de los conflictos, había una moral comunitaria y una actividad del conjunto de la gente que daba características nuevas a los movimientos. Había también una solidaridad entre diferentes colonias que hacía imposible reprimir una sin tener una respuesta generalizada. Sin embargo, y esto hay que plantearlo muy claro, es gracias al acostumbrado clientelismo del Estado mexicano que se puede entablar este tipo de relaciones. Las masas engendran un poder por su número, por su capacidad de amenaza, aunque aparentemente velada, ante el Estado. La respuesta de éste se sigue dando en términos de clientela o de favores específicos a quienes los piden, a veces con compromisos de retribución, pero más generalmente con el objetivo de apaciguar o resolver los problemas para frenar la movilización de la gente. Aun cuando el movimiento se presente compacto con diversos líderes o representantes, y se revista de todas las honorables formas de la democracia directa, es la manera de ser de la clientela de la que cosechan tanto las masas específicas como los líderes, a pesar de su línea popular, proletaria o democrática, sin importar aquí los gustos para calificarlos. Y esto porque no hay una política abierta, clara a todo público, que emprenda acciones, a pesar de las indispensables prioridades, para tratar los problemas y repartir públicamente los fondos disponibles, según los programas y necesidades por resolver. Y es aquella connivencia, implícita o explícita, la que corroe el ejercicio público al forjar, sea como logros autónomos de las masas o como servicios con costos y beneficios para los líderes, profundas y lúgubres complicidades políticas que terminan afectando lo que debe ser asunto general, que incluye, por supuesto, finiquitar la corrupción por clientela. Aunque, y esto lo digo con todo el respeto que se merecen los que su vida empeñan por buscar la libertad, siempre ha resultado por demás efectiva la técnica de utilizar, contra las tácticas del lobo, las fauces de la manada...

“Integrarse al pueblo” impulsó también a sus militantes a crear una escuela de igualdad social y económica, de formas de convivir con “sus representados”, de los cuales difícilmente podían distanciarse en toda la vida social. Pero se tendía, como en toda la tradición socialista, a confundir la igualdad política con la social o económica, y a plantearlo inclusive como ideal a cumplir. Esto al menos, en un país en donde la política se identifica con el trampolín corrupto para saltar a las alturas sociales, representó una manera de presentar palpablemente una imagen de honradez, al mismo tiempo que constituyó una fácil forma por medio de la cual los provenientes de estratos sociales más altos podían tomarse a sí mismos como “dirigentes del pueblo” y desempeñar ese papel en diversos ámbitos. No obstante, todo esto se centraba en la forma específica del Estado de resolver especialmente los problemas públicos que suscitaban conflictos sociales, con una satisfacción mesurada de las demandas gracias a una relación de connivencia con los líderes para formar clientelas. Ante sus bases, ante sus clientelas, los líderes al menos obtenían prestigio por su eficiente mediación, que por supuesto les redituaba simplemente para seguir

siendo líderes. Así, hay que retener cómo, bajo esta lógica, la resolución adquiere un carácter semiprivado a favor de la mediación que se deriva en la doble complicidad que el mediador puede jugar. Sólo una lucha por forjar las vías públicas para resolver los problemas generales, aunque a partir de los particulares, enriquece la vida política. Pero, si fuera esto, los líderes sólo podrían funcionar en el terreno social de los oficios, incluido el de urbanista o gestor de proyectos de todo tipo. Revolucionar el Estado para hacerlo democrático no puede equipararse a simplemente tomarlo, a emprender una nueva tiranía con militantes bondadosos, conscientes, con una nueva identidad cultural, cristiana o maoísta, perfectos. Es volver a confundir los medios con el fin.

Los conglomerados sociales en los que participaban los militantes, adquirieron formas más o menos estables de representación y liderazgo e, inclusive, aglutinaron tras de sí a un número cada vez mayor de gente con varias necesidades comunes, o al menos la común característica de requerir una capacidad de gestión de sus problemas específicos ante el Estado, constituyendo así las primeras versiones de muchas de las organizaciones no tradicionales y con varios grados de autonomía que ahora se ven en el panorama urbano y campesino.

Tal vez la sencillez de sus preceptos teóricos, su fácil didáctica, sea una característica que contribuyó a su eficacia, a su reproducción dentro de las condiciones históricas mexicanas. La acción social como camino para conocer lo social, inmiscuirse en situaciones sociales problemáticas y enfrentar diferentes formas de resolución con la participación de los involucrados, como manera de enfrentar lo que existe, y de ahí, poder rescatar o construir lo posible para “la causa final”, era una manera de emprender una conducta política nueva que en muchos sentidos invitaba a conocer y a pensar, a determinar y enfrentar el sentido mismo de los conflictos sociales, además de añadirse al riesgo que implicaban las resoluciones erróneas. Por supuesto que en sus orígenes esto fue tachado de “economicismo”, “espontaneísmo”, o “reformismo” por los ortodoxos y por sus críticos más recientes,² al mismo tiempo que envidiaban los resultados “organizativos”, pues a partir de relacionarse con los grupos sociales con problemas y demandas, al forjarse como promotores de la resolución estatal, patronal o social de necesidades específicas tendían a adquirir un lugar político de mediadores y representantes directos de los grupos sociales específicos, con un reconocimiento de la gente y de los funcionarios públicos ante los cuales se trataba. Sí, era volver a recorrer “por sí mismos el mismo camino, el mismo aprendizaje práctico de los dirigentes históricos de la clase obrera de este país” como bien resume, a manera de crítica, Barbosa.³ Pero

² *Ibid.*, pp. 129-130.

³ *Ibid.* La movilización popular urbana tuvo un antecedente, un concomitante claro. Coincidió con lo que había sido uno de los pilares del régimen post-revolucionario para obtener el consenso de las poblaciones rurales: el reparto agrario. Coincidió con sus formas y avatares, con las posibilidades de obtener una parcela, con la presión que a veces podían ejercer los grupos agrarios adentrándose en la tierra solicitada, e inclusive con la fundación de los nuevos centros de población que muchas veces llevó a efecto la reforma agraria. Coincidió el movimiento urbano también con todo lo que significaba la gestión

era un camino que la joven generación estudiantil no había recorrido, que inclusive la llevó a ver que la lucha por el poder tiene su historia, y no precisamente la de la utopía. Si ya en la confrontación entre Fidel Velázquez y Lombardo Toledano ganaron los pragmáticos contra los teóricos, y sobre eso había mucho que reflexionar y criticar, de todos modos en esa victoria del pragmatismo existían formas políticas que la izquierda tenía que aprender, pues en política la supervivencia tiene sus encantos. Aunque irónicamente, ahora estas formas de hacer política y organizar, tomada la delantera por el liberalismo social y Solidaridad, vuelven a plantearle a la CTM un desafío: el del Movimiento Territorial, que no deja de tener amplia relación con esta historia...

Por supuesto que posponer explícitamente la utopía revolucionaria para cuando las condiciones y las masas lo decidieran, era una forma de establecer diferencias frente a otras tendencias como las armadas o las partidistas que se embelesaban pensando en la próxima toma del poder. Era una patafísica revolucionaria que relegaba el juicio final histórico para después de pavimentar todas las calles y repartir todas las tierras o encumbrarse en todos los sindicatos de México, y esto desesperaba a las burocracias partidistas o a las guerrillas que perdían adeptos, pero su eficacia dio cauce no solamente a una gran variedad de manifestaciones de gente en pos de sus necesidades sino que incluso permitió, frente al consolidado corporativismo mexicano, ampliar las expresiones independientes y abiertas de la sociedad frente a las organizaciones institucionales, primordialmente las del Estado.

Al plantear como sujeto político al pueblo, si bien se ligaba a la amplia tradición del pensamiento político con orígenes medievales, reimpulsado por la Revolución francesa, en la discusión teórica de la izquierda mexicana se efectuaba un cambio básico. No sólo se tomaba partido en favor del papel revolucionario que podían cumplir los campesinos, como delineaba la concepción maoísta, y se permitía incorporar claramente a la pluralidad de "oficios" que podían darse en una colonia popular, sino que se hacía una generalización política a partir de la masa social, percibida gracias a la oposición que se efectuaba ante los potentados del dinero y

de trámites y esperas en las antecelas burocráticas, con las formas de intervención estatal para reprimir a los que se salían de su favor o, finalmente, con la entrega de la tierra y los lotes urbanos. Los movimientos urbanos más importantes tomaron las tierras para asentar sus colonias y la diferencia puede resaltarse como aquella que se encuentra entre lo urbano y lo rural. Pero la atenúa el origen de muchos que se asentaban en las nuevas colonias populares, y acaso como signo el que entre los "poseionarios" no dejaba de haber uno que otro que pudiera también estar inscrito como solicitante de tierras en los pueblos de donde provenía. Además, en la nueva militancia de la izquierda popular los lazos comunicantes se tendieron desde el movimiento agrario y en él se inspiraron; era un movimiento que se propagaba con intermitencia a lo largo de la historia rural mexicana por muchos años. Y era también donde el Estado tenía ya una larga experiencia para desactivar el conflicto rural con base en el reparto de parcelas y la institucionalización ejidal.

Por otro lado, es cierto, existían como antecedentes sociales claros los actos individuales o de pequeños grupos de los entonces común y metafóricamente llamados "paracaidistas", también raros casos masivos, pero aislados, en lugares de presión demográfica excepcionales y con formas caciquiles como el caso de el "Rey Lopitos" en Acapulco.

la política. Pero al verse la institución política, no como una serie de convenciones políticas e históricas con un sentido institucional capaz de recuperarse y ponerse al día, al perder de vista la igualdad política, ciudadana, el Estado en su conjunto y sus gobernantes eran puestos en igual género de conglomerado, al que había que enfrentarse para poder hacer la Revolución, esto es, cambiarlo en todos sus fundamentos. Inclusive la lucha política era la que se enfrentaba con el Estado, fuera por la construcción de una escuela o por enmendar el cauce de un río, o, esto sí con un claro sentido político, por el asesinato de colonos o miembros de las organizaciones. La actuación de los gobernantes podía entrar en la misma ecuación que todo el Estado de derecho. Si bien la represión estatal, emprendida generalmente con la violación de las garantías individuales constitucionales, daba todos los motivos para impugnarla, y levantar como bandera las garantías legales del individuo contra las balas o la tortura era algo absolutamente explícito e implícito desde entonces —ahora sólo los que antes no la querían ver lo encuentran como novedad y hasta se embelesan con cambiarle de nombre—, daba lugar, esa represión, a pensar el lado tiránico como el todo inamovible, esto le hizo el juego a los gobernantes al dejarles como patrimonio exclusivo, de ellos y los tolerados, el espacio público y el político no contenido en todas sus posibilidades. La mejor muestra de ese repliegue fue la clandestinidad, que tendía a reconstituir en el espacio de una secta las características esenciales de un cuerpo político con pretensiones absolutas: por su fin escatológico, por su religiosidad, por su entrega de los individuos al todo, por su ideología que le permite instaurar la verdad de la historia y sus derroteros...

Otro documento importante de diciembre de 1969, que mantiene el espíritu del primero es *Sobre el desarrollo de Política Popular y sus cuadros medios*, y en él se encuentra ya la tendencia hacia uno de los dos problemas que se verán con más hincapié: el de la organización. El primer punto en el que se pone un énfasis rotundo es en crear una “organización efectivamente democrática”, pues, si se propone “la liquidación del sistema capitalista” es para lograr “la participación en la construcción de una nueva sociedad caracterizada por la solidaridad, la democracia y el amor”, pero esto debe corresponder con una nueva actitud que consiste “en la convicción de que para cambiar un mundo cada vez más complicado se precisa de métodos en constante revolución y en consecuencia de un permanente rechazo a toda forma de dogmatismo, sectarismo y pensamiento cerrado, y en contrapartida, del uso constante de la imaginación, la inteligencia y la inventiva [...]”. Si menciona al marxismo es para recuperarlo, en contra de vacas sagradas y recetas, sólo como “guía para la acción”. En este sentido, la crítica que le hace a la izquierda tradicional es que pasa por alto que “el fin justifica los medios”. Es la cuestión de la democracia en las organizaciones lo que se vuelve el problema esencial:

Es esta cuestión de la democracia la que tal vez implique el reto más serio a las nuevas corrientes revolucionarias. Los efectos de la sociedad esencialmente autoritaria y antidemocrática en que nos desenvolvemos, la misma magnitud de la tarea en que nos

hemos comprometido son todos elementos que juegan, y muy poderosamente en contra del mantenimiento y la consolidación de *la democracia dentro de las organizaciones de la nueva izquierda*; pero a la vez, es su mantenimiento, su desarrollo, su consolidación, la única garantía de que el futuro será lo que queremos que sea porque éste empezará a ser construido en el presente.

Enfáticamente vemos cómo lo que caracteriza a lo socialista y revolucionario es lo democrático, y no al revés. El texto se preocupa por los rasgos “elitistas, autoritarios, burocráticos y tradicionalistas entre quienes se han dedicado a promover la formación de brigadas” y propone la crítica, la discusión y la democracia, y hacer de cada miembro de las brigadas un promotor.

El otro aspecto que se subraya en los documentos iniciales de Política Popular es en la investigación de los problemas sociales. Pero en el terreno de las formas de crear el conocimiento, en el método de análisis es donde se encuentran los mayores escollos, en esos primeros y esenciales planteamientos de Política Popular. El hecho de que el otro de los documentos importantes de 1969 sea *Sobre la investigación* pone de manifiesto la relevancia que se daba al conocimiento de las condiciones sociales en las cuales se trabajaba. El proceso de investigación se centraba en encuestas, y lo que se buscaba era establecer las diferencias entre clases y grupos sociales, para poder definir las correlaciones de fuerzas. Sin embargo, esto se llevaba a cabo de la manera más elemental y esquemática a partir de un “análisis de las contradicciones” que podría significar específicamente una exposición y evaluación de consabidas oposiciones, que se podrían aproximar al sentido de diferentes intereses percibidos como contrapuestos, y vislumbrados tanto en su intermediación social como los que, a partir de la teoría revolucionaria, se intuían a largo plazo en términos estratégicos. Lo cierto es que, a pesar de que se da todo un llamado a elaborar conocimientos a partir de la investigación, con este “método dialéctico” a lo que se tendía era a formular una visión paranoica de la realidad social y política para después actuar conforme a ella. Se buscaban “las posiciones justas e injustas”, los antagonismos principales y los secundarios, y, finalmente, los enemigos. De tal suerte que se tendió mucho menos a ver las especificidades sociales, políticas o económicas y, en todo caso, las coincidencias o confluencias, que los requeridos antagonismos. Al cabo de algunos años y claramente en 1976, contra todos los preceptos de la democracia, esta visión paranoica fácilmente fue traspuesta a los conflictos ideológicos y políticos en el seno de la misma organización militante, las luchas “a muerte” por el poder se dieron en torno a los liderazgos y sus “estilos de trabajo”, en torno a lo que se consideraba la centralización política y sus designios frente a la independencia que daba la dirección de movimientos sociales importantes. La más relevante de ellas fue la de “los socialdemócratas” contra “los proletarios”, o la “línea de masas” contra “la línea proletaria”.

A partir de ello, lo simple del maoísmo pudo encallar como método de análisis cotidiano. Cuando los militantes de clase media se daban a enseñar los preceptos de manuales como *El libro rojo* se podían llegar a ver escenas totalmente grotes-

cas por su estupidez y monotonía, sólo superadas al presenciar a un grupo de chinos recurrir a las citas de Mao para contestar cualquier género de pregunta que se les hiciera —como acostumbraban responder angustiados unos chinitos becados en El Colegio de México por convenios diplomáticos en tiempos del sexenio presidencial de Luis Echeverría. En el mejor de los casos, textos de Mao-Tse-Tung utilizados para el “estudio”, como el *Análisis de las contradicciones en el seno del pueblo*, servían para hacer recuentos y clasificaciones que acomodaban a personajes y conflictos según las circunstancias sociales reales en los que se debatían. El análisis “de las contradicciones” (concepto de la jerga político-social difícil de regresar aun hoy a su sentido) debía destilarse, a pesar de todo, con una buena dosis de sentido común y astucia política para servir de algo a la hora de decidir qué hacer, pero también servía para justificar la elaboración de antagonismos irreconciliables. De todos modos, lo cierto es que también hubo una desecación de toda la tradición del debate teórico de las escuelas marxistas. Bajo el supuesto de la simple preeminencia de la “práctica” sobre la “teoría”, de una inspiración althusseriana, fue fácil hacer un “corte epistemológico” que liberó de los libros a muchos militantes, no sin mantenerse esa aura que circunda al que se presenta como el portador del saber.

Pero la consecuencia más impresionante que tuvo con los años para la organización, a partir del llamado inicial de Política Popular, fue su tendencia hacia la formulación de una moral, de una religiosidad de la integración con las masas. El folleto *Por una línea de masas*, publicado en marzo de 1974, daba ya todas las pautas de una imbricación, de una entrega de los militantes ya no sólo a los fines de la centralización de la organización, sino también a la renuncia de todo lo privado, incluidas las conciencias que pudiera haber en ellos:

Lo más importante para acabar con las actitudes y las ideas burguesas es eliminar el concepto de lo privado, lo individual, el egoísmo [...] Si no se aniquila el concepto de lo privado, no se podrá establecer el concepto de lo público, del desinterés absoluto y el abandono de la menor preocupación de sí mismo. Para lograr lo anterior, lo fundamental es ligarse a las masas y convivir con el pueblo en sus luchas, pero también hay que estudiar la teoría revolucionaria [...] debemos servir total y sinceramente al pueblo, practicar el desinterés más absoluto sin la menor preocupación de nosotros mismos, fundirnos con el pueblo [...] atreverse siempre a luchar y saber que a la larga los enemigos del pueblo serán vencidos por el pueblo, ya que éste es el factor decisivo de la historia.

Aunque no se llega al extremo de proclamar la entrega al partido, a la Iglesia, sobre todas las cosas, sí, en la peor tradición totalitaria, lo público aparece porque se renuncia a todo lo privado. Se entra al pantano del religarse con una misión trascendente, del co-fundirse, del volverse masa, pueblo, para alcanzar la salvación histórica, como ley ineludible. Como en la tradición cristiana, el sentido trascendental de la muerte no deja de traerse a colación, aunque el absoluto no es Dios,

sino el Pueblo: “Todos hemos de morir, pero la muerte puede tener distintos significados [...] ‘Morir por los intereses del pueblo tiene más peso que una montaña. Servir a los capitalistas y morir por los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos peso que una pluma’”. Las santas escrituras, la verdad, la autoridad del profeta, el demonio, los ricos y los pobres, la unión después de integrarse al rebaño y a su Iglesia, los pastores y el apostolado, el pecado egoísta, los pensamientos pecaminosos, todo está ahí, aunque falta la separación de los géneros y la castidad, pero sin faltar las alusiones: “Divorciarnos de la masa significa no poder hacer nada”. Terminamos, pues, con una mezcla de orden religiosa con preceptos maoístas, para redimir al pueblo y evangelizarlo en su nueva misión histórica. Y esto, aunque no sea algo muy aceptable, aunque no ajeno, dentro de la ortodoxia tradicional de la izquierda marxista, rindió muchos “frutos” precisamente por el “estilo de trabajo” con que se revestía. De una manera generalmente franca y honesta, los militantes podían representar otra moral en una sociedad en donde lo político no sólo se distancia de lo ético, sino que se le opone. Aunque esto no disminuye, sino que vuelve aún más apremiante la necesidad de una reforma ética en las instituciones políticas mexicanas, que deben procurar mantener la esencial secularización de la sociedad.⁴

Con el actual Programa Nacional de Solidaridad se puede decir que el Estado ha tratado de ganarle la delantera a la autonomía política que puede conllevar la organización independiente de la proposición y resolución de los problemas de los grupos sociales de menores ingresos, con mayores carencias. Con ellos el Estado ya no sólo ocupa el lugar desde donde se ejercen las funciones públicas para resolver los problemas sociales, sino que llega a organizar asambleas y sus comités de representantes para distribuirles parte sustancial de los medios para emprender las obras de servicios que antes realizaban directamente varias instituciones específicas del Estado, promoviendo una organización comunitaria que dirija y supervise los trabajos. Esto se ha presentado como una manera de “privatizar” las funciones de asistencia social y obras públicas. Se puede argüir que la solidaridad que promueve a favor del Estado es simplemente producto de

⁴ Óscar Núñez en su muy interesante texto *Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano-popular*, UAM, 1990, hace una pormenorizada exposición de los cristianos de izquierda y su trabajo en las colonias, el cual puede ayudar a corroborar las semejanzas, que también expone, entre éstos y los militantes de línea de masas, aunque en mi visión las cercanías entre todos ellos son mayores. Otro punto esencial en el que también difiere es en la caracterización de la forma de clientela dada exclusivamente a los líderes tradicionales en la medida en que la tipifica esencialmente en éstos y no de manera general, que es lo que corresponde a la actuación del Estado, lo que llevaría a incluir tanto a los militantes de izquierda como a los grupos cristianos, aun cuando los adeptos que forman, los evangelizados o “enmaoizados”, entregan otro tipo de bienes como es el favor de las conciencias, la fe en la historia del proletariado o en la del profeta que resucitó, la entrega al Partido o a la Iglesia, la maldad de los santos comunistas o la bondad de los demonios cristianos: las transfiguraciones son varias. En fin: “Quien no está conmigo está contra mí, quien no congrega conmigo, esparce” (Mt. 12, 30).

Para una reciente visión amplia e informada de los movimientos sociales urbanos, véase Hugo Esteve Díaz, *Los movimientos sociales urbanos: un reto para la modernización*, México, Instituto de Proposiciones Estratégicas, 1992.

la eficiencia del programa mismo, de la misma obra de gobierno, que es una manera de poner a disposición de las comunidades los dineros públicos, y en cierto sentido lo es. Al tender a hacer responsable a grupos comunitarios del gasto público que se realiza en su beneficio se tiende a crear formas de supervisión y participación de los sectores sociales directamente involucrados y eso no deja de ser una virtud. Pero en el momento en que estos organismos son utilizados en lo político, para conformar formas de representación y participación en el interior de los partidos, y particularmente del partido oficial, lo que tenemos es el uso del dinero público para organizar políticamente a la gente, para darle un cuerpo que se incluya dentro de una representación que tiene por objeto darle forma al interés general, al uso del poder político con un fin específico. Ordinariamente se ha pensado, ante la lucha de diferentes ideologías y facciones determinadas por el poder político, inclusive con diversas orientaciones de clase, que los diferentes partidos políticos se disputan la posibilidad de instrumentar sus programas a través del acceso al poder político, que la lucha democrática partidaria tiene ese sentido. Si en algo se puede tipificar a los regímenes no democráticos, sean tiranías, monarquías o regímenes fascistas o totalitarios, es que son aquellos que pretenden ser la voz misma, la única del todo social y, esto se logra cabalmente cuando por diversos medios se conquistan todas las conciencias, sea por su claudicación ante el terror, sea por su tradicional sometimiento, sea por la unión de lo divino con el poder político, por la mixtura de la verdad absoluta sobre cómo debemos ser y actuar, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y el poder político, sea por la caridad pública o por el aprovechamiento de la necesidad de los pobres para ganarles la conciencia, sea por el poder que tiene el dinero para ganar conciencias, o sea por alguna otra que el imaginario humano logre inventar para ser seducido. La libertad que provoca la independencia económica cobra sus mayores amplitudes cuando los individuos pueden optar por diferentes alternativas para trabajar, cuando el trabajo se distancia de la política, de la subordinación que implica el servicio laboral para “ganarse la vida”. Las diversas opciones que procura un mercado no monopolizado lleva a la libertad de escoger alternativas laborales y en esto originariamente se podría ver la aparición de un mercado de trabajo libre, que posibilita a los individuos a optar por las diferentes alternativas que le presenta el mercado laboral. Con todo, los oficios, las capacidades individuales siguen siendo un elemento determinante para establecer las diferencias sociales a partir del mercado de trabajo, de ahí la importancia que tomó el tema de la educación a partir de las diversas corrientes liberales.

Además, esta pérdida de los intereses individuales en pos de su fusión con los del pueblo, tenía una serie de consecuencias encauzadas a aumentar la eficacia de la organización militante, entre ellas la disciplina, pero sobre todo, al perderse la diversidad de intereses sociales, económicos o políticos, al perderse los parámetros de las mentalidades individuales en pos de su subordinación, ya sea a la organización partidaria o a la masa expresada en sus asambleas, se propiciaba una homogenei-

dad tanto en el pensamiento de los militantes como una clara dependencia del papel partidario, de lo que acababan usufructuando los que ejercían el liderazgo.

En posteriores panfletos como *No olvidemos el centralismo proletario* de octubre de 1976 o *Formación teórica y lucha ideológica* de noviembre del mismo año, se vuelve al tono característico de las discusiones sobre las formas que deben tener las organizaciones y las sutilezas para deslindar la democracia proletaria del “ultrademocratismo pequeño burgués”, la “línea proletaria” de la “línea socialdemócrata”, siempre en relación con las formas para llevar a cabo las tareas concretas que había que realizar en los centros sociales en donde se asentaban. Acaso en este conflicto habría que ver también cómo la autonomía en la que se desenvolvían los movimientos sociales, sus intereses centrados en las necesidades evidentes de las poblaciones, tenía un sentido muy propio que se distanciaba del carácter político militante que le querían imprimir sus mediadores ideológicos, lo que llevó a las pugnas por el control político centralizado a su punto más álgido como también puede verse en el folleto *Derrotemos el ultrademocratismo pequeño burgués* de noviembre de 1976.

Desde la óptica corriente de las organizaciones políticas esta “izquierda radical” podía ser considerada clandestina, pero por su manera de actuar en el plano regional, en las localidades, las relaciones que establecían sus miembros eran bastante más públicas que las de los grupos de estudio del partido comunista o trotskista. Tuvo una injerencia directa en toda una serie de conflictos sociales que lograron relevancia en esos días, aunque se presentaban a la opinión pública de manera aislada y dispersa, con sus tiempos y espacios propios. Invasiones de tierras agrícolas o de lotes urbanos, luchas sindicales o asociaciones cooperativas ligadas a la producción fueron los campos privilegiados en los que era posible encontrar estudiantes que buscaban un sentido político profundo en tratar de resolver las demandas de diferentes sectores populares, pero también les permitió establecer relaciones y diferentes tipos de colaboración con funcionarios del Estado que cumplían su labor incluso al favorecerlos directamente. Esto creó una serie de comunicaciones que llegó, a veces, a la captación de líderes. Algunos personajes de la vida política actual tienen relación con estos pasos. A través de muy diferentes programas gubernamentales, como los “caminos de mano de obra” en tiempos de Echeverría, las tiendas rurales Conasupo, los “huertos familiares” o los de “talleres artesanales”, los de ayuda a zonas áridas o los del SAM, posteriormente, que asistían de diferentes maneras a las poblaciones, se dieron conexiones que permitieron establecer vínculos para mediar y desarrollar la organización popular, pero también para ascender en las esferas burocráticas.

Varios actuales funcionarios públicos, inclusive del más alto nivel, tuvieron diferentes grados de intervención en estas relaciones de mediación entre las cuales, su versión más vistosa es el actual Programa Nacional de Solidaridad, pero que también sirvieron para derroteros individuales en la CNC, en la SARH, la SRA o, inclusive, para fortalecer la carrera de nuevos líderes en el sindicalismo, como es el caso de Telmex.

Si esta historia de mediación se repite, con sus bondades y sus defectos, es porque en muchos sentidos hay formas de crear clientelas al hacer política en México que han aprendido tanto los funcionarios y líderes como los grupos populares. Puede ser defendida simplemente como la eficiencia de las diferentes organizaciones para resolver las demandas sociales, pero ésta la permite y otorga selectivamente el Estado. Esto es, la utilización que hacen los grupos sociales de los diferentes canales estatales que se abren para resolver sus problemas queda supeitada al juego político, a los intereses creados, y no a una disposición públicamente anunciada de recursos disponibles aunque siempre limitados. El problema es que se convoca primero a la organización para resolver esos conflictos, pero después resulta que atrás había toda una serie de signos ideológicos y políticos a los que había que rendir pleitesía.

Sin embargo, no es nada raro, por ejemplo, que un mismo grupo de campesinos se presente ante diferentes organizaciones, desde la oficial hasta la del antiguo partido comunista, esperando simplemente que se le resuelva su problema. O, más común todavía, ver al mismo grupo saltando de una organización a otra a través del tiempo, forjándose lealtades parciales, temporales, mientras no se soluciona un problema específico. Éstas han sido formas de la inteligencia política de los grupos sociales a los que se les permite —pues en el caso de los obreros de corporaciones sindicalistas ha sido más difícil. El recurso a estas organizaciones ha tenido más el signo de la resolución oficial de los problemas que el del campo ideológico con el que los mediadores se presentan para captar a sus posibles clientelas. Supuestamente bajo aquella lógica discriminatoria le era mucho más fácil a las organizaciones oficiales tener a mano la resolución de los problemas sociales, que la que podían ofrecer las organizaciones más espontáneas o, peor aún, las denostadas oficialmente, como las abiertamente ligadas al Partido Comunista. Pero contra esto iba la política de control de los movimientos sociales que el mismo Estado estaba enfrascado en proporcionar. Así, sus organismos se caracterizaban por la inmovilidad a la que trataban de someter a sus bases sociales, mientras que aquellas que tenían mayor autonomía eran las que mantenían una mayor iniciativa para demandar. De todos modos, nos encontramos con una suerte de inteligencia política, de oportunismo o utilitarismo —dirían algunos enfrascados en beatificar la mediación— de parte de los grupos sociales, la cual les permitía resolver más eficientemente sus problemas según la oferta de mediaciones y los presupuestos gubernamentales, según los tiempos políticos o la actitud específica de los funcionarios en cuestión, ante los cuales había que gestionar las demandas específicas. Esto finalmente hacía más difícil una implosión ideológica en torno a un solo mediador, en torno a una sola ideología. Las lealtades, en muchos casos, terminaban finalmente como relaciones personales, como amistades y conocencias. Sin embargo, en ocasiones también tenemos la exacerbación de esta inclusión ideológica corporativa, pues en ciertos momentos álgidos del conflicto social es posible observar la filiación a las asociaciones como una diferencia radical que se despliega

en violencia entre diferentes grupos, propiciada primordialmente por los mismos signos ideológicos de los mediadores y muy redituable para mantener las cohesiones agrupadas en torno a ellos. Hace falta, entonces, una clara separación entre lo público relacionado con lo social y todo aquello que tiene el carácter político y sus vías específicas para dirimirse. Un uso razonado y abierto de los dineros públicos para que sean vistos como lo que son: la contribución general de toda la sociedad para resolver los problemas específicos, y no un recurso para forjar clientelas, de este modo constituir un gobierno de lo social separado de una efectiva política de ciudadanos.

La manera en que los militantes de izquierda se ligaron al pueblo también propició otra serie de comportamientos sociales. Lo que con ciertas similitudes empezó como una “evangelización”, al no haber la organización partidaria o la Iglesia que los asalariara permanentemente, que mantuviera su entrega hacia el más allá por mediación de los desterrados, propició a veces la deserción por motivos económicos. También las ligas con las comunidades en varios casos tendieron a ser más fuertes que las que la organización militante pretendía, y contribuyeron a reintegrarlos a la realidad social y económica cotidiana a la que se habían adherido, impulsados muchas veces por la responsabilidad familiar. Algunos militantes continuaron como obreros o se forjaron en la producción agraria. Otros, se distanciaron y dedicaron a terminar sus estudios o se mantuvieron en el magisterio, enseñando en las comunidades o colonias donde habían militado.

En otros sentidos también esta izquierda que se relacionó con los problemas sociales abrió puertas a formas de movimientos sociales más típicamente contemporáneas. Tendió a forjar movimientos autónomos con relaciones netamente sociales, inclusive productivas, en las cuales participó. Empezó a dar forma a ciertas versiones de organismos sociales que ahora se conocen ampliamente como Organizaciones No Gubernamentales, ligadas a la solución de problemas sociales específicos. También hizo un llamado a la participación social y política de sectores sociales que eran desdeñados o estigmatizados por la izquierda tradicional, y, al menos en teoría y en sus orígenes, quiso hacer un poco más relativos los conflictos ideológicos entre militantes de diferentes organizaciones de izquierda que llegaron a ser sumamente sectarios y violentos. También porque esta nueva izquierda diluyó, en sí misma y en su relación con los movimientos sociales, las formas de las burocracias sectarias y sus jerarquías partidarias, si bien por lo mismo, por identificarse con la igualdad social, apenas ha logrado forjar una incipiente política partidaria, con sus consabidas características positivas y negativas, con sus figuras intelectuales para darle coherencia y estructuras orgánicas, a partir de las cuales participar con una visión nacional de la democracia. Aunque recientemente, el actual Partido del Trabajo, que en enero de 1993 acaba de obtener su registro definitivo, ha sido su más vistoso intento. Pero con cierta razón, todavía los partidos tradicionales mexicanos lo ven con recelo, no sólo por su origen, sino porque en las elecciones del año pasado en Durango optó por criticar la coalición PAN-PRD y

restarle fuerza a los cardenistas, lo que de ninguna manera fue visto con malos ojos por el PRI.⁵

Con el actual Programa Nacional de Solidaridad se puede decir que el Estado ha tratado de ganarle la delantera a la autonomía y al potencial político, lo que puede conllevar la organización independiente de la solución de los problemas de los grupos sociales de menores ingresos y mayores carencias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Con “Solidaridad” el Estado ya no sólo ocupa el lugar desde donde se ejercen las funciones públicas para resolver los problemas sociales, sino que incluso organiza asambleas con sus respectivos comités de representantes a los cuales distribuye parte sustancial de los medios necesarios para emprender las obras de servicios que antes realizaban directamente varias instituciones específicas del Estado, promoviendo una organización comunitaria que dirige y supervisa los trabajos, forjando sus propios mediadores. Desde la perspectiva anterior, podemos ver que por medio de esta política trata de ganarle el terreno a las organizaciones independientes, tipo Política Popular, que habían logrado forjar sus bases a partir de ese tipo de mediaciones. Además, no sólo se han creado “Comités de Solidaridad” para realizar muy diferentes tipos de obras sociales, sino que se ha tendido a darles una organización tal, que ahora podemos ver su confluencia en el “Movimiento Territorial”, el cual ha buscado su asiento en el PRI, e inclusive se diseñó el intento, por parte de la presidencia de la república, aunque todavía frustrado en su primera embestida durante la última XVI asamblea, para que se absorbiera la tradicional estructura sectorial corporativa del PRI y de la CTM en su territorialidad.⁶

Mientras se forman los “Comités de Solidaridad” para gestionar y supervisar los dineros públicos, tenemos ya un gasto del Estado para organizar a la gente. Aunque a pequeña escala, en el ámbito de una comunidad, esto tiene sus ventajas. Cuando los gastos y las obras cobran mayores proporciones, no puede dejarse de lado el concurso público para realizar obras o las auditorías profesionales para supervisar el destino honesto de los fondos. Pero de estas organizaciones comunitarias que deberían en todo caso ser meramente sociales vemos que se desprende otro sentido y dirección cuando la organización solidaria se despliega, por medio de sus “líderes naturales”, del orden comunitario al regional y, de ahí, con carácter político, a un Movimiento Territorial con formas de militancia política nacionales: llegamos a un militantismo auspiciado y vuelto profesional a través del Estado y dúctil a su nueva ideología: el “liberalismo social”. Esta mediación adquiere, además, una jerarquía cuya cúspide termina siendo su promotor y jefe, la más alta cabeza del poder público. En este sentido, el verdadero problema es que acaba por parecer una organización social autónoma e independiente cuando en realidad constituye

⁵ Paoli Bolio, Francisco José, “Partido del Trabajo ¿Embrión o parásito?”, *El Financiero*, 15 de abril de 1993, p. 46.

⁶ Sánchez, Jesús y Jenaro Villamil, “Producto de una negociación, la llegada de Ortiz Arana a la dirigencia del PRI”, *El Financiero*, 30 de marzo de 1993, p. 40. (Lo que es un dato primordial para la próxima pugna por el poder.)

una organización paraestatal, que reproduce muchas veces sus instituciones, desde la de los ayuntamientos hasta las de secretarías de Estado específicas. Se puede pensar que es una forma de descentralizar el uso de los recursos públicos, pero no deja de ser una manera de centralizarlos a favor de una estructura paralela a los poderes públicos institucionales: lo que trae consigo serios problemas a una verdadera democracia de ciudadanos. Hasta los criterios para seleccionar a quienes le están destinados los fondos tienen un sentido político, pues se atribuyen no a los pueblos y comunidades y no a través de criterios generales, sino en función de la “movilización”, de la “organización” que cobren los comités de solidaridad, mediante el acto de delegar representación a los miembros del comité elegido, del acto que implica imponerse a sí mismos como mediadores. El gasto social del Estado, una vez determinado a gran escala, donde también se le pueden dar prioridades de carácter inmediatamente político, como negarle fondos a los ayuntamientos en manos de la oposición política y otorgarlos sólo a través de la captación solidaria, o impulsar el gasto de solidaridad ahí donde se recrudece no el hambre o la falta de servicios públicos, sino la oposición política partidaria, acaba teniendo un fin dirigido a la satisfacción de las demandas inducidas y cosechadas políticamente. Queda pues la pregunta, con este género de mezcla solidaria de lo social y lo político, con esta liberalidad política para coligar lo social ¿no estamos entrando en un territorio que procura desvanecer la política de ciudadanos y sus partidos independientes, esto es, la democracia?